



Resumen ejecutivo y recomendaciones de actuación

INFORME COLE SEGURO

La seguridad de la educación durante el
primer trimestre del curso 2020/2021





Cole Seguro

Cole Seguro es un proyecto impulsado por la Plataforma de Infancia y Political Watch.

Este informe ha contado con el apoyo económico de la Open Society Initiative for Europe (parte de la Open Society Foundations) y la colaboración de la Fundación Cotec para la innovación.

- Fecha de publicación: 28 de enero de 2021
- Contacto:
 - info@plataformadeinfancia.org
 - info@politicalwatch.es

RESUMEN EJECUTIVO

La pandemia mundial de la COVID-19 ha tenido un impacto muy negativo en el sistema educativo en España. Aunque sus consecuencias en la educación aún no han podido ser analizadas en su totalidad, lamentablemente continuarán desplegando sus efectos en los próximos años. Además, las brechas digital y social preexistentes se han visto agravadas por la pandemia, poniendo de manifiesto las preocupantes consecuencias que esta crisis podría tener en términos de equidad educativa.

A pesar de la inversión de 2.000 millones de euros, de los llamados Fondos COVID-19, realizada por el Gobierno central para reforzar el sistema educativo durante el curso 2020-2021, existen muchos interrogantes sobre el alcance y la eficacia de las medidas adoptadas por las administraciones públicas implicadas para garantizar el derecho a la educación con plena seguridad y garantías. A través del proyecto Cole Seguro se han podido identificar algunas cuestiones relevantes que en mayor o menor medida han incidido e incluso limitado el ejercicio de este derecho:

■ Falta de diagnóstico y de medidas para responder a las necesidades generadas por la COVID-19

A pesar del tiempo transcurrido tras el cierre de los centros educativos a causa de la pandemia y el inicio del curso 2020-2021, más de la mitad de los integrantes de la comunidad educativa considera que las Administraciones Públicas y los centros educativos no han realizado un adecuado diagnóstico ni evaluación de la situación durante el final del curso pasado y no han realizado la planificación necesaria ni han tomado las medidas adecuadas para responder a las necesidades planteadas por la COVID-19 en el ámbito educativo.

■ Las familias se enfrentan a un mayor gasto con respecto a cursos escolares anteriores

La crisis generada por la COVID-19 ha supuesto un aumento en los gastos en materiales y equipos por parte de las familias, que es especialmente preocupante en el caso de las familias más vulnerables. Un 82% de las familias han manifestado haber tenido que incrementar su gasto educativo con respecto a cursos anteriores, siendo más de la mitad quienes consideran que este incremento ha sido sustancial.

■ Medidas insuficientes en materia de equidad educativa

Las medidas para que todos los niños y niñas de los centros tengan las mismas oportunidades no han sido suficientes, según lo indicado por el 51% de la comunidad educativa encuestada por Cole Seguro. Además, la población con las rentas más bajas es la que manifiesta en mayor proporción no sentir que se estén tomando medidas para garantizar la equidad educativa. En base a la información pública disponible, sólo ocho de los 19 territorios analizados han destinado Fondos COVID-19 a financiar medidas específicas para garantizar la igualdad de acceso a la educación.

■ Medidas de seguridad: uso extendido de los protocolos de entrada y salida de los centros y de las medidas de ventilación, pero apenas se reduce el número de alumnos por aula

La mayor parte de personas que han participado en esta iniciativa (80%) han manifestado saber a quién contactar en el centro educativo en el caso de haber un caso positivo de COVID-19. Además, los protocolos de entrada y salida en los centros y las medidas adicionales de ventilación han sido adoptadas en la mayor parte de los centros.

De media en España se ha aumentado en 2 personas la plantilla de profesorado con los Fondos COVID en cada centro educativo, lo que se traduce en que en un preocupante 57% de los centros participantes en Cole Seguro se indique no haber reducido el número de estudiantes por grupo con respecto al curso pasado. En lo que respecta a la puesta a disposición de nuevos espacios y aulas para impartir clase, el 54% han habilitado nuevos espacios en el centro y solo un 9% de los centros indica haber habilitado nuevos espacios en otras instalaciones del municipio.

■ Funcionamiento generalizado de grupos de convivencia en los centros educativos, pero reparto desigual de mascarillas

En una gran parte de los centros se han establecido grupos de convivencia en todos los cursos (71%). Además, en la mayor parte de los casos se han respetado estos grupos en todas o en la mayoría de las ocasiones durante el primer trimestre del curso 2020/2021.

A pesar de esto, y en lo que se refiere a la puesta a disposición de mascarillas, frente al 15% del profesorado que manifiesta que nunca se le proporciona mascarillas, el porcentaje casi se duplica en el caso de los estudiantes (27%). Por su parte, el 90% de los centros han proporcionado gel hidroalcohólico suficiente para toda la comunidad educativa, independientemente del tipo de centro.

■ Educación digital: diferencias por tipo de centro y nivel de renta, así como falta de previsión con respecto al alumnado con necesidades educativas especiales

Aunque las Comunidades Autónomas han hecho un anuncio de inversión media de 22,25€ por estudiante en educación digital proveniente de los Fondos COVID, la mitad de las personas encuestadas considera que las metodologías de enseñanza no se han adaptado lo suficiente a las necesidades de la enseñanza online, especialmente en lo que respecta al alumnado en situación de vulnerabilidad o con dificultades de acceso a la información.

El 52% de la población encuestada considera que la educación digital en su centro es regular o deficiente. El grado de satisfacción varía mucho dependiendo del nivel de renta y del tipo de centro. Las personas con menor nivel de renta consideran en mayor medida que la enseñanza digital es deficiente. En cuanto al tipo de centro, mientras que en los centros públicos solo un 26% de las personas encuestadas considera que la educación digital es excelente o buena, esta opinión asciende al 56% en los centros concertados y al 61% en los centros privados.

Es importante destacar que las Comunidades Autónomas con mayor satisfacción en cuanto a la educación digital se corresponden con aquellas que han ejecutado mayor proporción de sus Fondos COVID asignados a educación digital durante el primer trimestre del curso.

■ Grave impacto emocional y falta de medidas específicas de protección de la salud mental de niños, niñas y adolescentes

Las medidas adoptadas para frenar la expansión de la COVID-19 están teniendo y tendrán a medio y largo plazo un impacto negativo sobre la salud mental y el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes. El 82% de la población encuestada considera que las medidas adoptadas para la adaptación a la COVID-19 tendrán algún impacto negativo sobre la salud mental y el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes y no ha habido ningún anuncio de fondos destinados a ampliar los servicios de atención psicológica en centros educativos a cargo de los Fondos COVID durante el primer trimestre.

■ Diferentes usos de los Fondos COVID en las Comunidades Autónomas: priorización generalizada en personal docente y educación digital.

En todas las Comunidades Autónomas la categoría “personal docente” es la que concentra mayor inversión, representando en torno al 55% de la inversión total, seguida de lejos (10%) por la inversión realizada en educación digital. Si bien en cada territorio se ha hecho una diferente inversión de los fondos, las categorías de personal no docente y elementos de protección han sido en las que ha habido una mayor diferencia en la previsión de gasto entre unas Comunidades Autónomas y otras.

En lo que respecta a las contrataciones extraordinarias de personal docente realizadas, la mayoría de las Comunidades Autónomas ha optado por prolongarlas más allá del primer trimestre para responder a las necesidades docentes surgidas por la COVID-19 durante el año entero (de septiembre de 2020 a septiembre de 2021), en algunos casos sólo las prolongarán hasta finales de curso (junio 2021). Este criterio ha ido variando en las Comunidades Autónomas a medida que avanzaba el curso e iba quedando patente la necesidad de prolongar las medidas y planes de contingencia más de lo inicialmente previsto.

■ La participación de la comunidad educativa en el diseño de medidas: una cuestión clave

Los datos obtenidos a través de la iniciativa Cole Seguro indican que a mayor participación de la comunidad educativa en la elaboración de medidas, mayor satisfacción con respecto a las medidas adoptadas. Sin embargo, la mitad de la población considera que la comunidad educativa no ha podido participar de las decisiones que se han tomado en el centro en cuanto a la COVID-19.

■ Falta de transparencia y dificultades de acceso a la información sobre el uso de los Fondos COVID en materia educativa

Es importante destacar el gran número de obstáculos encontrados por Cole Seguro a la hora de realizar un análisis de las inversiones llevadas a cabo por parte de las Comunidades Autónomas haciendo uso de los Fondos COVID. La transparencia en el uso de los recursos públicos por parte de las administraciones educativas es deficiente, lo cual dificulta la evaluación y el adecuado control sobre las políticas públicas.

RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN

Equidad educativa

- Garantizar la presencialidad es clave para no agravar la desigualdad educativa. Se debe priorizar que los centros educativos permanezcan ofreciendo actividad presencial de forma segura, incluyendo los servicios de comedor y las actividades extraescolares y de refuerzo educativo.
- Garantizar la gratuidad en la etapa obligatoria, así como asegurar en todo caso que las familias más vulnerables no tengan que asumir ningún coste adicional para la compra de materiales y equipos necesarios, proporcionándose los mismos desde los centros educativos y adecuando los sistemas de becas y ayudas a las necesidades generadas por la COVID-19.
- Dar máxima prioridad al seguimiento, apoyo y refuerzo al alumnado de familias socio económicamente vulnerables, con necesidades educativas especiales y dificultades de aprendizaje, a través del establecimiento y refuerzo de programas de atención educativa, así como ampliando de forma extraordinaria las plantillas de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, PTSC, profesorado de apoyo y atención a la diversidad.

Seguridad

- Acentuar los esfuerzos para que todo el alumnado y personal de los centros cuente con equipos de higiene y protección personal, facilitando la accesibilidad en la adquisición de estos materiales en los centros educativos.
- Fortalecer la cooperación de los centros educativos con las administraciones locales y las Consejerías de Educación para ampliar y garantizar que los espacios donde se imparten clases cumplan con las distancias de seguridad y la ventilación adecuadas para evitar la propagación del virus, así como con las condiciones adecuadas para impartir clase.

Educación digital

- Dotar a los centros, al profesorado y al alumnado de infraestructuras, dispositivos y plataformas adecuadas para el desarrollo de la educación digital. Esta dotación debe acompañarse de la debida capacitación y formación tanto del profesorado como del alumnado para la educación digital, prestando especial atención a los colectivos vulnerables para evitar su desconexión del proceso educativo.
- Apoyar al profesorado para el desarrollo de metodologías mixtas de aprendizaje que cuenten con un fuerte componente digital y que puedan ser adaptables al contexto no presencial, con el fin de garantizar la continuación de las clases y la posibilidad de seguimiento de las mismas por parte del alumnado en caso de tener que guardar cuarentena por contacto con casos positivos.

Salud mental

- Articular un plan de atención a la salud mental y el bienestar emocional en los centros educativos, reforzando los programas y plantillas de atención psicológica para que este servicio sea accesible y dé cobertura a todo el alumnado del centro

Transparencia

- Ofrecer, desde las autoridades educativas competentes en cada territorio, una **información clara, detallada y actualizada sobre la inversión pública realizada** para garantizar el derecho a la educación bajo el contexto de pandemia, precisando las actuaciones realizadas debido a las distintas transferencias de fondos recibidas específicamente destinadas a este fin. La ausencia de esta información impide el adecuado control sobre las actuaciones públicas y **dificulta la medición de la adicionalidad de los fondos extraordinarios** puestos a disposición de las CCAA.
- Avanzar desde la publicidad de la información pública a la accesibilidad de la misma. **Numerosas fuentes públicas de información empleadas en el presente análisis incumplen los más mínimos estándares de transparencia y acceso a información.** Es alarmante que, a día de hoy, en España aún existan parlamentos autonómicos o boletines oficiales sin buscadores avanzados de información, consejerías de educación sin ninguna información de contacto o plataformas de contrataciones autonómicas que no centralicen la información acerca de las contrataciones públicas realizadas por los municipios de su territorio.
- En relación específicamente con el acceso a la información sobre los contratos públicos, **todas las CCAA deberían ofrecer la información relativa a sus contrataciones a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público** (incluidas Galicia, Andalucía, Cataluña, País Vasco y la Comunidad de Madrid, que actualmente no vuelcan allí sus datos sobre contratos menores). Del mismo modo, el objeto del contrato debería ser suficientemente descriptivo como para permitir entender a cualquier tercero qué bien o servicio se está adquiriendo. Por último, debería ser obligatorio informar acerca del tipo de procedimiento de contratación seguido (ordinario, urgente, de emergencia, etc.), así como ofrecer siempre acceso a los pliegos de la licitación. Sin esta información, la labor de fiscalización externa se ve seriamente comprometida.

